

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
4122/2016
QUEJOSA: *******

VISTO BUENO
SR. MINISTRO

PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

COTEJÓ

SECRETARIA: PATRICIA DEL ARENAL URUETA

COLABORADORA: MIRIAM ITZEL HERNÁNDEZ DELGADO

México, Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al --- emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4122/2016, promovido en contra del fallo dictado el dos de junio de dos mil dieciséis por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 391/2015.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si se cumplen los requisitos que condicionan la procedencia del recurso. En particular, debemos determinar si el tribunal colegiado se condujo de conformidad con la doctrina constitucional que rige tratándose de alegatos relacionados con la violación al derecho humano a no ser objeto de tortura.

I. ANTECEDENTES DEL CASO

1. **Hechos.** En la sentencia de amparo, el tribunal colegiado tuvo por acreditado lo siguiente¹: el seis de agosto de dos mil diez, aproximadamente a las veintiún horas, ***** , en compañía de otro sujeto, fueron al domicilio de ***** –hoy occiso–, ubicado en la calle ***** .

¹ Cuaderno del Juicio de Amparo Directo 391/2015, hoja 429 y vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

2. Al llegar a dicho domicilio, la hoy sentenciada tocó la puerta del inmueble. Posteriormente, lanzó piedras pequeñas a la ventana de la habitación de ***** , quien al ver a ***** –a quien conocía desde hace aproximadamente seis meses– bajó y abrió la puerta. El pasivo quedó frente a la otra persona que acompañaba a la quejosa, quien portaba un instrumento punzocortante.
3. La quejosa y el otro individuo ingresaron al domicilio del pasivo. Después, se apoderaron de dos esclavas de oro, dos anillos de oro con piedras incrustadas, un reloj marca Citizen de chapa de oro, una cartera que contenía diversas credenciales, y de diez a quince llaves.
4. ***** fue herido con el instrumento punzocortante y perdió la vida.
5. El seis de agosto de dos mil diez, el Ministerio Público dio inicio a la indagatoria ***** , por el delito de homicidio calificado en contra de la quejosa². El once de agosto, la quejosa fue detenida por el delito de homicidio.³ Declaró ante el Ministerio Público.
6. De acuerdo con la narrativa del tribunal colegiado, aunque en esta declaración la quejosa no reconoció tener la intención de privar de la vida al ofendido y desapoderarlo de los bienes sustraídos, sí se ubicó en el tiempo y lugar de los hechos relativos al robo.
7. Con el desglose de esa indagatoria por homicidio, el mismo once de agosto de dos mil diez, la autoridad ministerial dio inicio a la indagatoria relacionada ***** , con el fin de investigar, entre otros delitos, el de robo a casa

² Esta indagatoria desembocó en una sentencia condenatoria, dictada por el Juez Sexagésimo Octavo Pernal del Distrito Federal, en la causa ***** , por el delito de homicidio calificado (bajo los supuestos de ventaja y traición). Posteriormente, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México modificó la sentencia de primera instancia. Inconforme con dicha determinación, la quejosa promovió el amparo directo 480/2012, el cual fue negado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En contra de esta sentencia, la quejosa promovió el amparo directo en revisión 1241/2013. Sin embargo, el Presidente de este Alto Tribunal, mediante proveído de nueve de mayo de dos mil trece, determinó desechar el recurso por improcedente, al advertir que en la demanda de amparo no se planteó algún concepto de violación de constitucionalidad. Inconforme, la quejosa interpuso el recurso de reclamación 381/2013, el cual fue declarado infundado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de julio de dos mil trece.

³ Hoja 401 y 402 del expediente relativo al amparo directo 391/2015.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

habitación con violencia.

8. El trece de agosto de dos mil diez, el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de la quejosa por el delito de homicidio.
9. El diecinueve de octubre de dos mil once, dentro de las instalaciones de la penitenciaría de *****, el Ministerio Público tomó la declaración de la quejosa respecto al delito de robo con violencia. En ella, ratificó su primera declaración ministerial de once de agosto de dos mil diez. El dieciséis de noviembre de ese año, el Ministerio Público ejerció acción penal contra la quejosa y solicitó una orden de aprehensión.⁴
10. **Procedimiento penal.** El dos de agosto de dos mil trece, en la causa penal *****, el Juez Quincuagésimo Cuarto Penal del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) dictó sentencia condenatoria en contra de ***** por su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo calificado (lugar habitado y por medio de la violencia moral)⁵.
11. Por este delito, el juez impuso a la quejosa la pena de siete años, cuatro meses, dieciséis días de prisión y ciento y un días multa, equivalentes a la cantidad de cinco mil ochocientos tres pesos con cuarenta y seis centavos.
12. Inconforme, el defensor particular de la sentenciada interpuso recurso de apelación. El veinticuatro de junio de dos mil catorce, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal modificó la sentencia de primer grado (toca *****)⁶.

II. JUICIO DE AMPARO

⁴ Ibídem, hoja 402.

⁵ Cuaderno de Toca *****, hoja 107. En esa misma sentencia, se condenó al coacusado de la quejosa, *****, por los delitos de homicidio calificado y robo calificado. Como consecuencia, le impuso una pena de cuarenta y un años, diez meses y veintisiete días de prisión, así como ciento y un días de multa, equivalentes a la cantidad de cinco mil ochocientos tres pesos.

⁶ La modificación consistió en que la Sala disminuyó la pena de prisión por el delito de robo; declaró improcedente el aumento de la pena por la agravante de violencia moral y consideró como insubsistente la suspensión de los derechos civiles de la sentenciada.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

13. **Demanda, trámite y sentencia.** Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil quince, *****, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil catorce⁷.
14. En la demanda, la quejosa señaló como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20, fracción I, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
15. El trece de octubre de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito admitió la demanda de amparo.⁸ En esa misma fecha, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito admitió la demanda de amparo, la cual registró bajo el número 391/2015; desechó de plano la demanda de amparo, única y exclusivamente por el acto de ejecución y la autoridad ejecutora; tuvo como terceros interesados a *****; y ordenó girar oficio al agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto.
16. El dos de junio de dos mil dieciséis, el tribunal colegiado negó la protección de la Justicia Federal, ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público y al Procurador Federal de Justicia de la Ciudad de México sobre las manifestaciones que hizo la quejosa en el sentido de haber sido víctima de actos de tortura psicológica durante su detención⁹.
17. **Recurso de revisión.** La quejosa promovió revisión por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el cual fue remitido a esta Suprema Corte con el expediente del juicio de amparo¹⁰.
18. Por auto de trece de julio de dos mil dieciséis, el Presidente de la Suprema

⁷ Cuaderno del Juicio de Amparo Directo 391/2015, hoja 44.

⁸ *Ibidem*, hoja 205.

⁹ Cuaderno del Juicio de Amparo Directo 391/2015, hojas 259 a 448.

¹⁰ Amparo Directo en Revisión 4122/2016, hojas 3 a 14.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el toca y registrarlo con el número 4122/2016. Al advertir que la firma del escrito de revisión difería notablemente de las que obraban en las actuaciones del juicio de amparo directo, el Presidente ordenó que se requiriera a la quejosa para que, ante la presencia del actuario judicial adscrito a este Alto Tribunal, expresara si ratificaba o no la firma autógrafa que calzaba el escrito de expresión de agravios. Se le apercibió que, en caso de no hacerlo, el recurso se tendría por no interpuesto¹¹.

19. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, ante el actuario Judicial adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, la quejosa ratificó su escrito de expresión de agravios¹².
20. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso, designó como ponente al señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y envió los autos a la Primera Sala para su radicación. Además, solicitó los autos del toca penal 122/2014, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito¹³.
21. Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Presidente de la Primera Sala acordó avocarse al conocimiento del asunto¹⁴.

III. COMPETENCIA

22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II; 96 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Puntos Primero y Tercero del

¹¹ *Ibíd*em, hojas 15 y 16.

¹² *Ibíd*em, hoja 20.

¹³ *Ibíd*em, hojas 25 a 27.

¹⁴ *Ibíd*em, hoja 40.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

Acuerdo General Plenario 5/2013. El mismo se interpuso contra una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en un juicio de amparo directo en materia penal.

IV. OPORTUNIDAD

23. El recurso se interpuso dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia impugnada se notificó de manera personal a la quejosa el quince de junio de dos mil dieciséis¹⁵. La notificación surtió efectos el dieciséis de junio del mismo año, en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.
24. El plazo transcurrió del diecisiete de junio al treinta de junio. No se cuentan los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del mismo mes y año, por ser sábados y domingos respectivamente, los cuales son inhábiles de acuerdo con los artículos 19 de la legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
25. Por tanto, si el recurso se interpuso el veintitrés de junio de dos mil dieciséis¹⁶, es evidente que se presentó en tiempo.

V. LEGITIMACIÓN

26. Esta Primera Sala considera que la recurrente está legitimada para interponer el presente recurso de revisión porque se le reconoció la calidad de quejosa en el juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.

VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

¹⁵ Cuaderno del Juicio de Amparo Directo 391/2015, hoja 455.

¹⁶ Cuaderno del Amparo Directo en Revisión 4122/2016, hoja 3.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

27. A continuación se sintetizan los conceptos de violación, las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios.

28. **Demanda de amparo.** En esencia, la quejosa planteó los siguientes argumentos:

- La autoridad responsable únicamente otorgó valor probatorio a las declaraciones presentadas como pruebas de cargo, sin analizar de fondo las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo actuado.
- Del contenido de las declaraciones de los testigos se advierte que no les consta que la sentenciada hubiese salido del domicilio del lugar de los hechos.
- De acuerdo con la quejosa, se dio ventaja a la parte denunciante con respecto a las pruebas presentadas, toda vez que existe un proceso anterior por el delito de homicidio en su contra, bajo la causa penal *****.
- El Ministerio Público cometió el delito de fraude procesal al otorgar el beneficio a la parte que representa, así como simulación de pruebas al dar ventaja a la parte denunciante.
- El Ministerio Público no instruyó la indagatoria conforme al artículo 21 constitucional, sino que fue precipitada e incompleta.
- Los policías remitentes actuaron bajo los visos del caso urgente, pero vulneran la verdad histórica de los hechos, al usar violencia moral en su contra. Violaron su libertad para tenerla por culpable.¹⁷
- Además, se vulneraron los artículos 122, 124, 135, 246, 247 y 248 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.
- El juez de primera instancia sólo otorgó valor probatorio a las declaraciones de sus deponentes, sin valorar las emitidas por la quejosa.
- El Ministerio Público omitió investigar el dicho de ***** , quien afirmó que la única persona que podría ser sospechosa era quien rentaba la casa al occiso. Tampoco se investigó el móvil real del delito

¹⁷ Hoja 6 del expediente relativo al amparo directo.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

de robo, ni se probó la existencia de los bienes supuestamente robados.

- Los policías utilizaron violencia moral en su contra para tenerla por culpable.
- Su investigación carece de realidad y fue objeto de simulación.
- La condena solo mantiene relevancia por la declaración amañada, que se impone a la quejosa en un momento posterior a la aprehensión, sin que hubiese habido flagrancia.
- El juez de la causa y la Sala apelación no otorgaron valor probatorio a las testimoniales vertidas durante la *****, en la que se ejercitó acción penal en su contra. Dichas declaraciones ya se encontraban en el Juzgado 68° Penal con número de expediente *****.
- Por otro lado, la quejosa cuestionó la validez del reconocimiento por fotografías que realizó el testigo *****. A su juicio, de sus declaraciones se advierte que éste nunca vio la cara de la persona responsable del delito en cuestión, solo la observó de espaldas.
- Por otro lado, la quejosa señaló que fue forzada a declarar en su contra, lo cual sirvió para declararla culpable.¹⁸ Los Agentes remitentes de la Procuraduría del Distrito Federal trajeron hojas. Con eso, se violó el artículo 20 de la Constitución.
- Es cierto que existe una declaración de la quejosa, detallada hasta el pormenor. Sin embargo, en el juicio que antecede a esta instancia existieron vicios consistentes en mutilación, omisiones en declaraciones.
- No se le otorgó el beneficio de la duda.

29. **Sentencia de amparo.** El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó el amparo. Esta es una síntesis de sus principales consideraciones:

- En primer lugar, el órgano colegiado consideró infundado el concepto de violación en el que la quejosa alegó que existió error o mala fe por

¹⁸ Hoja 27 del cuaderno relativo al amparo directo.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

parte del Ministerio Público respecto a la radicación sin detenido de la causa penal ***** . Señaló que no advertía alguna particularidad que indicara error o mala fe por parte de la representación social.

- A continuación, consideró que era fundado pero inoperante el cuestionamiento que hizo la quejosa respecto al reconocimiento del testigo ***** . A su juicio, ese reconocimiento, hecho a través de la cámara de Gesell, se realizó sin que la quejosa fuera asistida por un defensor particular o por un defensor de oficio. Por ende, se vulneró su derecho a una defensa adecuada.
- Para sustentar este punto, el tribunal colegiado citó la jurisprudencia emitida por esta Primera Sala, de rubro: “RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL. EN DICHA DILIGENCIA ES NECESARIA LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA”¹⁹. Por ello, consideró pertinente retirar del material probatorio el testimonio de ***** , en lo relativo al reconocimiento de la quejosa a través de la cámara de Gesell.
- A pesar de esto, estimó que subsistían el resto de testimonios – desvinculados de la diligencia de reconocimiento– efectuados por ***** . En éstos, ese testigo señaló que el día de los hechos vio salir a una mujer del domicilio del occiso. Esa declaración, unida al resto del material probatorio, permite concluir que la sentencia impuesta fue correcta. Sobre este punto, el colegiado invocó la jurisprudencia emitida por esta Sala, de rubro: “PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA”²⁰.
- Por otro lado, en suplencia de la deficiencia de la queja, el tribunal colegiado advirtió la ilegalidad de los reconocimientos efectuados por ***** y ***** , a través de la presentación de fotografías obtenidas de los teléfonos celular encontrados en posesión de la quejosa –al momento de su detención– y de su coinculpado. A su juicio, la obtención de estos datos y de las fotografías se efectuó de modo incompatible con el artículo 16 constitucional y el derecho a la privacidad del que gozan todas las personas.

¹⁹ Época: Décima Época, Registro: 2008588, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 10/2015 (10a.), Página: 1038.

²⁰ Época: Décima Época, Registro: 160500, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 140/2011 (9a.), Página: 2058.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

- La información que se extraiga, vía autorización judicial, de los archivos electrónicos, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video, relacionada estrictamente con la posible comisión de un hecho delictivo, puede ser incorporada al procedimiento penal y, por ende, será lícita. Sin embargo, si esa actividad de búsqueda y obtención de información se realiza sin la autorización judicial correspondiente, cualquier prueba que se extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como ilícita. Al respecto, el tribunal colegiado citó la jurisprudencia de la Primera Sala de rubro: **“DERECHO A LA INVIOABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.”**²¹
- No obstante, la anulación de estos testimonios no tiene el alcance de invalidar el resto de las manifestaciones vertidas antes y después de tal reconocimiento. En las otras declaraciones ***** y ***** señalaron que identificaron a una mujer cargando una mochila, lo cual genera indicios independientes.
- Así, la exclusión de tales reconocimientos fue, para el tribunal colegiado insuficiente, para conceder la protección de la justicia de la unión solicitada.
- Por otro lado, también de oficio, el tribunal colegiado advirtió una violación al derecho a la no autoincriminación, previsto en el artículo 20, apartado a), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —en su redacción anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho—, así como en el artículo 8.2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sentencia condenatoria tomó en cuenta los testimonios de los policías de investigación. Ellos narraron haber realizado una entrevista a la quejosa, en la que admitió haber participado en el delito por el que fue sentenciada.
- Para soportar esta determinación, el órgano colegiado señaló que esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 29/2014, fijó el criterio

²¹ Época: Décima Época, Registro: 2002741, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 115/2012 (10a.), Página: 431.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

que el derecho a la no autoincriminación es un derecho específico que forma parte del derecho de defensa adecuada. Todo inculpado tiene derecho a no ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan.

- En este sentido, los agentes policíacos que realizan una investigación sobre hechos delictivos o que efectúan una detención no pueden interrogar al detenido. Cualquier declaración que se realice como consecuencia de este supuesto debe declararse nula. Para soportar este punto, el colegiado invocó la tesis aislada emitida por esta Sala, de rubro: “DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO”²².
- Sin embargo, el órgano colegiado estimó que aún con la anulación de estos testimonios, no es posible conceder la protección a la quejosa, en virtud de que existían otros diversos medios de prueba que acreditaban su participación en el delito atribuido.
- Declaró infundado el concepto de violación en el que la quejosa adujo que la autoridad responsable no fundamentó ni motivó el acto reclamado. A su juicio, de la sentencia combatida se advertía que la sala de apelación fundó y motivó en conformidad con el artículo 16 constitucional.
- También consideró infundado el concepto de violación de la quejosa en el que alegó que se violó en su perjuicio el artículo 17 constitucional, pues la autoridad responsable emitió la resolución definitiva de manera completa e imparcial.
- Calificó de infundado el concepto de violación referente a que la autoridad responsable realizó una inexacta aplicación de la ley. La sala de apelación valoró de manera legal las pruebas del sumario, de conformidad con los artículos 246, 248, 250, 251, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México.
- Posteriormente, el órgano colegiado señaló que el caudal probatorio

²² Época: Décima Época, Registro: 2009457, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCXXIII/2015 (10a.), Página: 579.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

resultaba suficiente para acreditar los elementos configurativos del delito de robo calificado –bajo la hipótesis de cometido en lugar habitado–. Se refirió a los medios de prueba valorados por la responsable y estimó comprobada la responsabilidad penal de la quejosa por la conducta que se le reprocha. Señaló que la autoridad responsable actuó con apego a los principios de la lógica y los lineamientos que enmarcan la correcta valoración de la prueba.

- Por otra parte, el tribunal colegiado calificó como infundado el concepto de violación referente a que se transgredió su derecho a la defensa al omitir agregar las declaraciones tomadas en las primeras horas de investigación ministerial en el expediente *****, en el que se había sentenciado a la quejosa por el delito de homicidio. Mencionó que ese expediente deriva de una hipótesis de acreditación diferente al delito de robo calificado. Además, la quejosa no solicitó que se recabaran dichos testimonios para ser agregados al proceso.
- A continuación, consideró inoperante lo alegado por la quejosa en el sentido de que debió restarse valor probatorio a su primera declaración por derivar de una detención ilegal, por efectuarse sin que existiera flagrancia o caso urgente.
- La Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido que las transgresiones cometidas durante la fase de averiguación previa, en particular, las derivadas de una detención ilegal, constituyen violaciones procesales susceptibles de ser analizadas, y en su caso, reparadas mediante amparo directo. No obstante, lo anterior está condicionado a que no haya sido controvertida la detención previamente en sede constitucional.
- Las violaciones alegadas ya fueron estudiadas por el mismo colegiado en sesión de trece de marzo de dos mil trece, en el D.P. 480/2012, respecto a la sentencia que la condenó por el delito de homicidio calificado. Por tanto, fue correcto que la responsable otorgara valor probatorio a la primigenia declaración de la quejosa, la cual constituye una confesión calificada, con valor indiciario. Admite hechos propios constitutivos de delito.
- Si bien la quejosa se retractó en parte de su primera declaración ante el Ministerio Público, eso no se encuentra corroborado con algún medio de prueba eficiente. Constituyen argumentos defensistas sin valor probatorio. Su primer ateste adquiere preponderancia sobre las

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

segundas, por haber sido emitida recién verificado el evento delincencial, sin tener oportunidad de reflexionar acerca de lo sucedido para alterar los hechos y mejorar su situación jurídica. Por tanto, su declaración ministerial debía tomarse en cuenta, en cuanto a lo que le perjudica y no en lo que pudiere beneficiarle.

- El tribunal colegiado citó la jurisprudencia emitida por esta Sala, de rubro: “VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INculpADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO HAYAN SIDO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO”²³.
- Por otro lado, estimó que era infundado el argumento de que se actualizaba una duda sobre la participación de la quejosa. Las pruebas previamente valoradas fueron aptas y suficientes para formular el reproche en su contra.
- También consideró correcto el grado de culpabilidad que la autoridad responsable impuso a la quejosa, las penas impuestas y la condena a la reparación del daño.
- La quejosa, en su demanda de amparo, hizo referencia a posibles actos de tortura durante su detención. En su demanda señaló que “...*los policías judiciales remitentes... VULNERAN LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS AL USAR VIOLENCIA MORAL CONTRA MI PERSONA, pues VIOLAN MI VOLUNTAD PARA TENERME POR CULPABLE...*”
- En la ampliación de declaración de la quejosa ante el Juez del proceso, el día once de abril de dos mil doce, refirió que los agentes policiales la habían obligado a firmar unos papeles. En esa declaración (trascrita por el tribunal colegiado)²⁴ la quejosa señaló haber sido torturada psicológicamente e indicó que le habían tratado de agarrar el cuerpo, presionándola para que firmara papeles. Además, la quejosa había indicado que los judiciales le dijeron que si no firmaba esos papeles, le iban a traer a su mamá y a su papá a la cárcel. Señaló que quien la agredió física y verbalmente fue el señor *****.

²³ Época: Décima Época, Registro: 2004134, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 45/2013 (10a.), Página: 529.

²⁴ Ver hoja 442 del cuaderno relativo al expediente de amparo.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

- El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el careo constitucional entre la quejosa y el agente policiaco *****, ella acusó al agente de haberla obligado, mediante tortura psicológica, a firmar unas hojas, sin conocer su contenido.
- La tortura psicológica no se encuentra demostrado en autos. A pesar de ello, ordenó que se diera vista al Ministerio Público de los actos de tortura, con la finalidad de que iniciara una investigación para determinar si la quejosa fue torturada psicológicamente.
- Los artículos 1º, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establecen la obligación de las autoridades de investigar de oficio y de manera inmediata los actos denunciados de tortura. Para soportar este punto, el colegiado invocó la sentencia *Cabrera García y Montiel Flores vs. México* de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la tesis, emitida por esta Sala, de rubro: “TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA”²⁵.

30. **Recurso de revisión.** En síntesis, la recurrente expresó lo siguiente:

- El tribunal colegiado omitió estudiar las copias fotostáticas que anexó la quejosa a su demanda de amparo, del juicio civil promovido por el señor ***** en contra de ***** . Al no realizarse el estudio de dichos documentos públicos se le deja en estado de indefensión.
- A su juicio, éstas tienen relación con la interpretación directa del artículo 1º y 21 constitucional, pues el Ministerio Público tiene la obligación de investigar todas y cada uno de los testimonios que deben ser trascendentes para las posibles líneas de investigación.
- Aduce que fue torturada durante su detención. También cuestionó la legalidad de ésta. La autoridad no se ciñó a la figura de caso urgente. No hubo riesgo fundado de que la quejosa pudiera sustraerse de la acción de la justicia. El Ministerio Público no citó por escrito a la quejosa, sino que ordenó su presentación.
- El testigo ***** declaró que durante la diligencia de

²⁵ Época: Décima Época, Registro: 2006483, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.), Página: 561.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

reconocimiento, a través de la cámara de Gesell, la quejosa no contó con un abogado defensor. Por lo que dicho reconocimiento carece de validez.

- Citó las jurisprudencias de rubro: “DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)”²⁶ y “DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE”²⁷.
- El tribunal colegiado no consideró la tortura psicológica a la que fue sometida durante la indagatoria. Bajo dichos actos de tortura, la recurrente refirió que “fui obligada a considerarme parte de historia en que no participe [...]”²⁸. Después, volvió a señalar que fue torturada para declararse culpable.

VII. PROCEDENCIA

31. En primer lugar debemos precisar que el amparo directo del cual deriva el presente recurso de revisión se promovió el veintitrés de septiembre de dos mil quince. Por ello, su tramitación se encuentra regulada por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo 9/2015 del Pleno de este Alto Tribunal.
32. El artículo 107 fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos

²⁶ Época: Novena Época, Registro: 175110, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 23/2006, Página: 132.

²⁷ Época: Novena Época, Registro: 175111, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P. J/20, Página: 1512.

²⁸ Cuaderno de Amparo Directo en Revisión 4122/2016, hoja 10.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

Mexicanos dispone que el recurso de revisión en los juicios de amparo directo procede únicamente cuando se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, se realice la interpretación directa de algún precepto constitucional, o cuando se omita decidir sobre esos temas si fueron planteados por el quejoso en los conceptos de violación; además, debe tratarse de un asunto que permita fijar un criterio importante y trascendente, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁹.

33. Por su parte, el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Es decir, procede la revisión de las sentencias dictadas en el amparo uniinstancial, solo si entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia respecto de la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.
34. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 9/2015 el ocho de junio de dos mil quince, a fin de regular las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de revisión contra sentencias dictadas en amparo directo, deben colmarse los supuestos siguientes:

1° Se decida sobre la constitucionalidad de una norma general o se establezca una interpretación directa de la Constitución, o bien, que habiéndose planteado dichos temas en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio.

2° Lo anterior entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales.

²⁹ Lo anterior es así, conforme al Decreto de reforma de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, con entrada en vigor el cuatro de octubre siguiente: "No hay cambios de fondo. Ajuste de redacción por técnica legislativa: IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI (Dictamen Senado, p. 15)."

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

35. En relación con el primer requisito, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 21/2011-PL, esta Primera Sala entiende que una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando se exige la tutela del principio de supremacía constitucional para la solución de un caso concreto, en el que se presenta un conflicto interpretativo de la determinación normativa que para ese supuesto otorga la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo o de alguna norma fundamental o de un derecho humano reconocido en algún tratado internacional ratificado por México.
36. Una problemática de constitucionalidad se puede definir, en términos generales, mediante un criterio positivo y otro negativo. De manera positiva, se origina por el ejercicio interpretativo de un elemento o norma constitucional para la resolución del caso, lo cual no debe entenderse solo como la interpretación de los preceptos de la Constitución Federal, sino también de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º, párrafo primero, constitucional. El criterio negativo radica en la identificación de su opuesto: la cuestión de legalidad.
37. Aquellas cuestiones jurídicas atinentes exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley o la determinación del sentido de una norma infraconstitucional, se encuadra como una cuestión de legalidad en la que lo relevante es desentrañar el sentido de dichas fuentes normativas. Lo anterior no implica que una cuestión de legalidad esté desvinculada de la fuerza protectora de la norma fundamental, pues la Constitución establece en sus artículos 14 y 16 el derecho humano a la legalidad, lo cual conlleva evaluar la debida aplicación de la ley; sin embargo, ello se trata de una violación indirecta a la Constitución que no exige el ejercicio interpretativo de un elemento genuinamente constitucional, sino solo una referencia en vía de consecuencia.
38. Adicionalmente, aun cuando exista una cuestión de constitucionalidad, la

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

procedencia del recurso se supedita a que se fije un criterio de importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales que emita el Tribunal Pleno. Al respecto, el punto segundo del citado Acuerdo General Plenario 9/2015, dispone lo siguiente:

SEGUNDO. Se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) del Punto inmediato anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

También se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

39. De acuerdo con este marco normativo, es posible concluir que el caso sí satisface los requisitos que condicionan la procedencia del juicio de amparo directo en revisión, ya que la resolución de este asunto implica el pronunciamiento sobre una cuestión de constitucionalidad de importancia y trascendencia, que podría tener un impacto significativo en la esfera jurídica de la quejosa, hoy privada de libertad con motivo de una sentencia condenatoria por el delito de robo. Concretamente, esa cuestión de constitucionalidad versa sobre la tortura y el significado que el tribunal colegiado atribuyó a esta violación.
40. En su demanda de amparo, la quejosa alegó que había sido obligada a declarar en su contra. Literalmente, señaló que “los policías judiciales [...] vulneran la verdad histórica de los hechos al usar violencia moral contra mi persona, pues violan mi voluntad para tenerme por culpable [...]”³⁰.
41. En respuesta a esto, el órgano colegiado ordenó dar vista al Ministerio

³⁰ Cuaderno del Juicio de Amparo Directo 391/2015, hoja 9.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

Público de la denuncia de tortura realizada, con el objetivo de que se iniciara una investigación que permitiera determinar si efectivamente existieron los actos denunciados.

42. Queda claro que el tribunal colegiado reconoció la dimensión de la tortura como delito y, en ese rubro, actuó de conformidad con la doctrina aplicable. Sin embargo, queda explorar si hizo lo propio respecto a la concepción de la tortura como una violación procesal. A partir de los conceptos de violación y agravios hechos valer por la quejosa, es posible advertir que ella menciona haber confesado en su declaración ministerial por ser víctima de tortura psicológica, porque intentaron tocar su cuerpo y porque la obligaron a firmar “unas hojas”.
43. Igualmente es posible observar que el tribunal colegiado se refirió a la declaración ministerial de la quejosa como una confesión calificada divisible, válida (a su juicio) por haber sido emitida con espontaneidad y sin posibilidad de reflexiones.
44. Entonces, debemos examinar si el tribunal colegiado recogió de manera integral la doctrina que esta Sala ha desarrollado respecto a las condiciones que posibilitan una reposición de procedimiento ante un alegato de tortura.
45. Por las condiciones narradas, se está ante la posible actualización de lo que establece el punto segundo del Acuerdo General 9/2015; a saber: que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional.
46. Una vez que se ha identificado el tema que constituye la materia del recurso, debemos determinar qué temas no pueden ser revisados, ya sea por tratarse de cuestiones de mera legalidad o por ser carentes de los requisitos de importancia y trascendencia.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

47. No pasa inadvertido que en sus agravios la recurrente alegó que se vulneró su derecho de defensa adecuada, por no contar con la asistencia de un abogado defensor durante la diligencia de reconocimiento, a través de la cámara de Gesell. Sin embargo, esto no puede ser objeto de análisis porque ese reconocimiento ya fue explícitamente excluido por el tribunal colegiado. El hecho de que esa exclusión no haya resultado en un amparo es solo una cuestión atribuible a la valoración de su preponderancia (o la falta de la misma) en relación con el resto del material probatorio.
48. Tampoco es posible examinar lo argumentado en relación con la validez de la detención. El tribunal colegiado señaló que ese tema fue valorado anteriormente en el amparo directo promovido contra la sentencia que tuvo a la quejosa como responsable por el delito de homicidio. Eso se debe, según la narrativa de hechos que se tuvo por acreditada, a que la detención se llevó a cabo inicialmente por el delito de homicidio y después se desglosó la causa penal por robo.
49. En contra de esa sentencia de amparo (relacionada con la condena por el delito de homicidio) la quejosa ya interpuso un primer recurso de revisión, que a su vez fue desechado por el Presidente de esta Suprema Corte en un acuerdo posteriormente confirmado por su Segunda Sala. Es una cuestión ya juzgada y, por ende, en este momento no es posible analizar los méritos del análisis realizado en aquella sentencia de amparo.
50. El resto de los otros agravios manifestados por la quejosa deben declararse inoperantes porque plantean mera cuestiones de legalidad, relacionadas con la valoración de las pruebas de cargo, con su pertinencia y con lo que ella considera material insuficiente para soportar la condena. Es aplicable la jurisprudencia de esta Primera Sala, cuyo rubro es: **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ADUZCAN**

CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD³¹.

51. Por tanto, únicamente nos limitaremos a analizar si el pronunciamiento del colegiado respecto al tema de tortura se apegó a la doctrina desarrollada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

VIII. ESTUDIO DE FONDO.

52. Para estar en condiciones de valorar si el tribunal colegiado se apegó a la doctrina de la Sala en materia de tortura, primero debemos retomarla y, posteriormente, haremos el análisis del caso concreto.

53. Este presente apartado tiene como base el siguiente desarrollo temático:

A. Proscripción de la tortura a través de la doctrina constitucional de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A.1. Prohibición de la tortura en el sistema jurídico nacional.

A.2. Naturaleza jurídica de la tortura.

B. Oportunidad de la denuncia de actos de tortura.

C. Tortura como violación a derechos humanos que tiene impacto en el proceso penal instruido contra una persona señalada como víctima de la misma.

C.1. Obligación de investigación.

C.2. Omisión de la investigación, como violación a las leyes del procedimiento que tiene trascendencia en la defensa del quejoso.

C.3. Reposición del proceso penal con motivo de la omisión de investigación de la denuncia de tortura, que implica violación a las formalidades esenciales del procedimiento que deja sin defensa a una persona sujeta a un procedimiento penal.

D. Aplicación de las reglas de exclusión probatoria ante la demostración de la tortura, en la vertiente de violación a derechos humanos que tiene impacto en un proceso penal instruido contra una persona señalada como presunta víctima de la misma.

A. Proscripción de la tortura a través de la doctrina constitucional de la

³¹ Este criterio de la novena época puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación; tomo: XXV; mayo de 2007; tesis: 1a/J. 56/2007; página: 730. Texto: "Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, relativos al recurso de revisión en amparo directo, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia el estudio de cuestiones propiamente constitucionales. Por tanto, si se plantean tanto agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de preceptos de la Constitución, como argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes".

Suprema Corte de Justicia de la Nación

54. En los últimos años, este Tribunal Constitucional ha establecido las directrices a partir de las cuales han generado los parámetros concretos que permiten atender de manera eficaz una denuncia de tortura, cuya probable víctima es una persona que está sujeta a un procedimiento penal. Ello, con la finalidad de hacer explícitas las obligaciones impuestas por el orden constitucional a todas las autoridades del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, entre las que está comprendida vulneración a la integridad de las personas por actos que impliquen tortura.

55. Sin embargo, la complejidad del tema y los diferentes escenarios en que es posible que se actualice el conocimiento de actos de tortura, ya sea porque tenga lugar una denuncia o alguna autoridad advierta la existencia de indicios concordantes esa violación a derechos humanos, obligan a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a continuar con el análisis jurídico necesario que permita esquematizar a detalle el alcance en la protección del derecho humano a no ser objeto de tortura.

A.1. La prohibición de la tortura en el sistema jurídico nacional

56. La premisa de la parte el presente estudio, se sustenta en el reconocimiento a nivel del orden normativo nacional sobre la proscripción de la tortura, como violación al derecho humano a la dignidad de las personas, al margen de la finalidad con la que se realice.

57. En efecto, de acuerdo con el contenido del texto actual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen normas jurídicas que establecen expresamente dicha prohibición. La referencia a la proscripción de la tortura está claramente enfatizada en los artículos 20, apartado B,

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

fracción II³²; 22, párrafo primero³³; y 29, párrafo segundo³⁴, del citado ordenamiento constitucional. Además, en la legislación secundaria, el fundamento de la prohibición de la tortura tiene como referencia los artículos 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura³⁵.

³² **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** (el texto corresponde a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2018):

Artículo 20.

[...]

B. De los derechos de toda persona imputada:

[...]

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

[...].

³³ **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** (el texto corresponde a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2018):

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

[...].

³⁴ **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** (el texto corresponde a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011):

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

[...].

³⁵ **Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura** (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991):

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura y se aplicará en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal y en el Distrito Federal en Materia de Fuero Común.

Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente

58. Por otra parte, esta Suprema Corte ha reconocido que la proscripción de la tortura es una directriz marcada por diversos instrumentos internacionales, algunos suscritos por México³⁶; lo cual ha permitido comprender el concepto de tortura, así como las obligaciones de los Estados para proscribirla.
59. En efecto, conforme al contenido de los instrumentos de fuente internacional,

de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Artículo 6. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

Artículo 7. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o., deberá comunicarlo a la autoridad competente.

La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del detenido o reo, o un tercero.

Artículo 8. Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba.

Artículo 9. No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policiaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculcado y, en su caso, del traductor.

Artículo 11. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciera, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que se hace en la parte final del artículo 4o. de este ordenamiento.

³⁶ Los parámetros de fuente internacional se encuentran contenidos en los documentos siguientes: artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 10 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; artículo 5 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos; artículo 16 de la Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño; artículo 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; principio 6 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; artículo 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; regla 87(a) de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; artículo 6 de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que viven; regla 17.3 del instrumento Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); artículo 4 de la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado; directriz IV de las Líneas Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los Derechos Humanos y la Lucha Contra el Terrorismo; artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; artículos 49, 52, 87, 89 y 97 del Convenio de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III); artículos 40, 51, 95, 96, 100 y 119 del Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Convenio IV); artículo 75.2.ii del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I); y artículo 4.2.a. del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional (Protocolo II).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

en términos generales, se desprende la obligación de establecer dentro del sistema jurídico doméstico la condena a la tortura, bajo el contexto de delito, con independencia del grado de concreción —ya sea consumada o tentada—; el grado de intervención del sujeto que la perpetra; la obligación de detener al torturador para procesarlo internamente o extraditarlo previa investigación preliminar; la obligación de sancionar con las penas adecuadas este delito; prestar todo el auxilio posible a todo procesado penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y, que ninguna declaración ni confesión obtenida bajo tortura será válida para configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador.

60. Es así como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la importancia de los tratados y declaraciones en la materia; la interpretación de los mismos hecha por los organismos y Tribunales autorizados, en cuanto estipulan la obligación de prohibir, prevenir, investigar y sancionar la tortura; así como la aplicación de la regla de exclusión de las pruebas que tienen como origen actos de tortura.
61. Tópicos que son parte configurativa del parámetro de regularidad constitucional³⁷ que rige la interpretación constitucional en nuestro país,

³⁷ El cual se compone por los artículos 1, 22 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Además, con los parámetros de interpretación constitucional fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las resoluciones siguientes:

- Contradicción de Tesis 293/2011, resuelta por el Tribunal Pleno, en sesión de tres de septiembre de dos mil trece, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
- Contradicción de tesis 21/2011, resuelta por el Tribunal Pleno en sesión de nueve de septiembre de dos mil trece, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
- Amparo directo 9/2008, resuelta Por la Primera Sala, en sesión del 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
- Amparo en revisión 703/2012, resuelta por la Primera Sala en sesión de 6 de noviembre de 2013. Cinco votos por la concesión del amparo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el amparo liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez.

Véase al respecto: *Caso Maritza Urrutia Vs Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 92; *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160,

conforme al cual existe la prohibición de tortura, como directriz de protección a la integridad personal, que con el carácter de derecho humano que no puede suspenderse ni restringirse bajo ninguna circunstancia. De conformidad con dicho parámetro, el derecho a no ser objeto de tortura, ni de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es un derecho absoluto con carácter de *jus cogens*. Consecuentemente, las autoridades tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar la tortura.

62. Una vez establecidas las bases a partir de las cuales en el orden jurídico constitucional del país se ha reconocido de manera amplia la protección al derecho humano de no ser sujeto a la tortura, corresponde ahora realizar el desarrollo de la doctrina constitucional en la que se sustenta el alcance de las obligaciones de las autoridades del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a derechos humanos con motivo de actos de tortura.

A.2. Naturaleza jurídica de la tortura

63. Desde la Novena Época de construcción de la doctrina constitucional, esta

párr.271; y, *Caso Bueno Alves Vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No.164, párr. 76. Véanse también: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Art. 2; Convención sobre los Derechos del Niño, art. 37, y Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, art. 10; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, art. 2; Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 5; Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño, art. 16; Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), art. 4; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, art. 3; Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquiera Forma de Detención o Prisión, principio 6; Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, art. 5; Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, regla 87(a); Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No Son Nacionales del País en que Viven, art. 6; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), regla 17.3; Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado, art. 4; Líneas Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los Derechos Humanos y la Lucha Contra el Terrorismo, directriz IV; art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; Convenio de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III), arts. 49, 52, 87 y 89, 97; Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Convenio IV), arts. 40, 51, 95, 96, 100 y 119; Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), art. 75.2.ii, y Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional (Protocolo II), art. 4.2.a.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

Primera Sala delineó cuáles eran las obligaciones de las autoridades del Estado Mexicano, frente al imperativo de prevenir la práctica de la tortura. Lo cual está claramente referenciado en la tesis 1a. CXCII/2009, la cual destacó las siguientes obligaciones: a) establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; b) sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; c) detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación; d) sancionar con las penas adecuadas este delito; e) indemnizar a las víctimas; f) prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y, g) prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador.

64. Posicionamiento de orden constitucional que tiene como base el reconocimiento de la relevancia del derecho humano a la integridad personal, como bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura, conforme a los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De manera que el derecho a no ser objeto de tortura tiene el carácter de absoluto; por tanto, no admite excepciones, incluso frente a situaciones de emergencia que amenacen la vida de la Nación.³⁸
65. Es importante mencionar que en términos de lo prescrito en el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, norma vigente en el ordenamiento jurídico mexicano, la tortura es un delito o crimen de lesa humanidad, cuando se comete como parte de un ataque generalizado o

³⁸ Criterio aislado 1^a. CXCII/2009, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, Materias: penal, constitucional, p. 416, con el rubro siguiente: **"TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA"**. Precedente: Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.³⁹ Lo cual destaca aun con mayor precisión la importancia de la tortura como acto atentatorio de derechos humanos, cuya práctica es rechazada por la comunidad internacional. Así, resulta evidente que, conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del *jus cogens* internacional.

66. Lo anterior, en el entendido de que las consecuencias y efectos de la tortura impactan en dos vertientes, tanto de violación de derechos humanos como de delito⁴⁰. Por tal motivo, la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso bajo los estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos como de delito⁴¹. Pronunciamientos que tienen como base los estándares generales desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el derecho a la integridad personal y las obligaciones de prevenir y sancionar la tortura, que derivan de la prohibición de la tortura de personas bajo custodia de autoridades del Estado.
67. Al respecto, el citado Tribunal Internacional toma como base el contenido de los numerales 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos

³⁹ Criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. X/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, pág. 650, con el rubro:

“DELITOS O CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA”.

Precedente: Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

⁴⁰ De conformidad con la tesis aislada CCVI/2014 de esta Primera Sala, publicada en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 562, con el rubro: **“TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO”.**

⁴¹ Criterio emitido por esta Primera Sala en la tesis aislada CCV/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 561, con el rubro: **“TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES”.**

Humanos⁴², enfatizado que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; lo cual confiere a la prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes el alcance de absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas⁴³.

68. Lo anterior, pues se trata de una prohibición que pertenece al dominio del *jus cogens* internacional, comprensión que es compatible con los tratados de alcance universal y regional en los que se consagra tal prohibición y el derecho inderogable a no ser sometido a ninguna forma de tortura, lo mismo que en numerosos instrumentos internacionales que consagran ese derecho y reiteran la misma prohibición, incluso bajo el derecho internacional humanitario⁴⁴.
69. De manera complementaria, el referido Tribunal Internacional de Derechos Humanos ha precisado que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta.

⁴² **Convención Americana sobre Derechos Humanos:**

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Ello, para establecer que cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención Americana acarrea necesariamente la violación del artículo 5.1 del mismo instrumento normativo

⁴³ Al respecto, véase el *Caso Espinoza González Vs. Perú (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)*, sentencia de 20 de noviembre de 2014, serie C, No. 289, párrafo 140.

⁴⁴ Véase el *Caso Espinoza González vs. Perú*, op. cit., párrafo 141.

70. Lo que implica una revisión de las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues éstas deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo; por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos⁴⁵
71. Cabe agregar que, el citado Tribunal Internacional al interpretar el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con la definición que al respecto establece el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estableció que, de conformidad con su jurisprudencia, se está ante un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato: i) es intencional; ii) cause sufrimientos físicos o mentales, y iii) se cometa con cualquier fin o propósito.⁴⁶ Por tanto, reconoce que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica.⁴⁷

⁴⁵ Véase: *Caso Espinoza González vs. Perú*, párr. 142.

En la resolución se citan como referencias:

[229] *Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo, supra*, párr. 57, y *Caso J. Vs. Perú, supra*, párr. 362.^[230]
Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 127, y *Caso J. Vs. Perú, supra*, párr. 362

⁴⁶ Véase: *Caso Espinoza González Vs. Perú*. párr. 142. En dicha resolución el propio tribunal internacional refiere que dicho pronunciamiento tiene origen en las resoluciones siguientes: *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párrafo 57; *Caso J. Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 362 y 364; y, Corte I.D.H., *Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 127. *Caso Espinoza González vs. Perú*, supra, párr. 143. *Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 79. *Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, supra*, párr. 200. *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo, supra*, párr. 102; *Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala, supra*, párr. 92; *Caso Tibi Vs. Ecuador, supra*, párr. 147, y *Caso Baldeón García Vs. Perú, supra*, párr. 119.

⁴⁷ Lo cual, precisa el propio Tribunal Internacional, es consistente con su jurisprudencia establecida en el caso *Cantoral Benavides vs. Perú*, en el que subrayó que entre los elementos constitutivos de la tortura está incluida “la intervención de una voluntad deliberadamente dirigida a obtener ciertos fines, como obtener información de una persona, o intimidarla o castigarla” (*Cfr. Caso Cantoral Benavides*. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 97). Después, en el caso *Bámaca Velásquez vs. Guatemala*, este Tribunal concluyó que “los actos denunciados [...] fueron preparados e infligidos deliberadamente, con el fin de obtener de Efraín Bámaca Velásquez información relevante para el Ejército. Según los testimonios recabados en el presente proceso, la supuesta víctima fue sometida a actos graves de violencia física y psíquica durante un prolongado período de tiempo con los fines antes mencionados y, así, puesta en un contexto de angustia y de sufrimiento físico intenso de modo intencional, lo que no puede calificarse sino como tortura, tanto física como psicológica” (*Cfr. Caso Bámaca Velásquez*. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 158). En el caso *Maritza Urrutia vs. Guatemala* la Corte indicó que “entre los

B. Oportunidad de la denuncia de actos de tortura.

72. Por la trascendencia de violación al derecho humano a la integridad personal por la comisión de actos de tortura contra las personas que están sujetas a custodia de las autoridades del Estado, se ha destacado que la existencia de la afectación genera serias consecuencias; lo cual obliga a que la tortura sea investigada desde dos vertientes, como delito en estricto sentido y como violación a los derechos humanos de la persona sometida a algún procedimiento penal, a partir de pruebas que presuntamente se obtuvieron con motivo de actos de tortura a los que fue sometido el inculpado. Sin embargo, previo a la delimitación de los alcances de las investigaciones, la primera interrogante que debe responderse es si la denuncia de tortura puede condicionarse a criterios de oportunidad para hacerla valer.
73. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene claro que la denuncia de tortura de ninguna manera puede condicionarse a circunstancias de temporalidad o de oportunidad para alegarla, o incluso para

elementos de la noción de tortura establecidos en el artículo 2 de la Convención Interamericana contra la Tortura se incluyen métodos para anular la voluntad de la víctima con el objeto de obtener ciertos fines, como información de una persona, o intimidación o castigo, lo que puede ser perpetrado mediante violencia física, o a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo. [...] Algunos actos de agresión infligidos a una persona pueden calificarse como torturas psíquicas, particularmente los actos que han sido preparados y realizados deliberadamente contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas o para someterla a modalidades de castigos adicionales a la privación de la libertad en sí misma” (Cfr. *Caso Maritza Urrutia*. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párrs. 91 y 93). En el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú* la Corte señaló que “entre los elementos de la noción de tortura [...] se encuentra el infligir a una persona sufrimientos físicos o mentales con cualquier fin”, y citó como ejemplo de esto que, “[e]n general, en las situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos, el uso sistemático de tortura tiene como fin el intimidar a la población”. (Cfr. *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri*, *supra* nota 44, párr. 116). Posteriormente, en el caso *Tibi vs. Ecuador* la Corte afirmó que los “actos de violencia perpetrados de manera intencional por agentes del Estado contra el señor Daniel Tibi produjeron a éste grave sufrimiento físico y mental. La ejecución reiterada de estos actos violentos tenía como fin disminuir sus capacidades físicas y mentales y anular su personalidad para que se declarara culpable de un delito. En el caso *sub judice* se ha demostrado, además, que la presunta víctima recibió amenazas y sufrió hostigamientos durante el período de su detención, que le produjeron pánico y temor por su vida. Todo ello constituye una forma de tortura, en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana” (Cfr. *Caso Tibi*, *supra* nota 43, párr. 149). En el caso *Caesar vs. Trinidad y Tobago* la Corte realizó un análisis objetivo de la pena corporal de flagelación y declaró que ésta constituye una “forma de tortura” y una violación *per se* del derecho a la integridad personal, así como una “institucionalización de la violencia”. Al igual que en los casos mencionados anteriormente, el Tribunal tomó en cuenta la intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad del trato, antes de calificarlo como tortura (Cfr. *Caso Caesar*. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párrs. 72 y 73.).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

determinar que se investigue en caso de que se advierta la existencia de indicios concordantes con actos de tortura. Esto obedece a su carácter de violación a derechos humanos, por lo que no está sujeta a condiciones de preclusión.

74. Tal afirmación tiene un contexto de aplicación genérica, en atención al carácter grave de la violación al derecho humano a la integridad personal, por lo que debe investigarse por el Estado, a partir de que se tenga conocimiento de la denuncia o cuando existan razones fundadas para creer que se ha cometido un acto de tortura contra una persona. Lo cual no está sujeto a la decisión discrecional de las autoridades del Estado, sino que se trata de un imperativo de observancia inmediata que tiene sustento en normas jurídicas de fuente internacional y de derecho interno, las cuales han quedado precisadas en el apartado anterior.
75. Aunado a lo anterior, es importante precisar que cualquier denuncia de tortura tiene trascendencia jurídica, al tenor del esquema de obligatoriedad que impone el artículo 1º de la Constitución Federal, para que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, cumplan con la promoción, respeto, protección y garanticen los derechos humanos. Imperativo constitucional que tiene aparejado el deber de las autoridades del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar todo tipo de violación a los derechos humanos, en los términos establecidos por la ley.
76. Por ende, de forma autónoma, la tortura debe investigarse por ser una conducta constitutiva de un hecho calificado por la ley penal como delito. Ello, a fin de que se determinen las circunstancias en que se concretó la afectación al derecho humano, a la integridad de la presunta víctima, así como que se compruebe quién lo cometió, y de probarse tal circunstancia, se aplique la sanción respectiva.
77. Adicionalmente, habrá que precisar que existe una circunstancia concomitante en que puede actualizarse la tortura, no sólo como factor desencadenante de investigación por tratarse de una afectación al derecho humano de integridad

personal, con independencia de la finalidad con la que se haya infligido; sino también, cuando la tortura es empleada como medio para la obtención de pruebas que permitan someter a una persona a cualquier tipo de procedimiento penal, en el contexto más amplio.

78. Lo anterior es así, porque la concreción de actos de tortura contra una persona, con la finalidad de obtener elementos que sirvan de sustento para vincularla con la comisión de un delito y determinar su responsabilidad en ese hecho, además de afectar la integridad personal de la presunta víctima de tortura, también conlleva otro tipo de afectación a los derechos humanos como la libertad, derivada de detenciones ilegales y/o arbitrarias, así como a contar con una defensa técnica adecuada y oportuna, entre otro tipo de afectaciones que pudieran generarse.
79. En este sentido, es esencial referir el alcance e intensidad de la dignidad humana como condición y base de los demás derechos fundamentales de la que deriva la integridad personal (física, psíquica y moral), la cual a su vez comprende el derecho fundamental a no ser torturado. Conforme a la doctrina jurídica estructurada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad del hombre constituye una condición inherente a su esencia, a su ser. Por tanto, el reconocimiento de que, en el ser humano, hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituye un derecho a ser considerado como ser humano, como persona, es decir, como ser de eminente dignidad.
80. En consecuencia, la dignidad es un derecho absolutamente fundamental para el ser humano, base y condición de todos los demás. Es el derecho a ser reconocido siempre como persona. Por tanto, la dignidad humana se configura como la base de la que se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad; como el derecho a ser reconocido y a vivir con la dignidad propia de la persona.
81. La anterior comprensión de la naturaleza y alcance de protección del derecho humano a la dignidad personal, está referenciada en la tesis aislada P.

LXV/2009, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “**DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES**”.⁴⁸

82. Asimismo, como ya se precisó, el derecho a la integridad personal (*física, psíquica y moral*) comprende además, como una especie, el derecho fundamental a no ser torturado, ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes con el objeto de obtener información o una confesión dentro del proceso criminal.
83. En ese orden de ideas, puede afirmarse válidamente que el núcleo, objetivo y fin último de la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, es en realidad la tutela de un derecho fundamental más amplio, a saber: la integridad personal (*física, psíquica y moral*)⁴⁹, derivado de la dignidad humana; por tanto, inherente a su esencia, es un derecho absolutamente fundamental del que gozan todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos.

⁴⁸ Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Constitucional, p. 8. El contenido de la tesis aislada es el siguiente: El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.

Precedente: Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

⁴⁹ Un entendimiento amplio de derecho a la integridad personal (física, psíquica y moral) abarcaría el cuerpo humano con todos sus componentes, desde las moléculas que forman sus genes, hasta su anatomía y apariencia, así como las potencialidades intelectuales y sensoriales, incluidas las que tienen que ver con la capacidad de experimentar dolor físico o padecimiento psicológico o moral. Véase Canosa, Raúl, et al., El derecho a la integridad personal, en García Roca, Javier, et al. (edit.), *El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos*, Madrid, Civitas-Thomson Reuters, página 140.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

84. Es por ello que el derecho internacional dispone de varios instrumentos convencionales y declarativos que prohíben en términos absolutos la práctica de la tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, debido a su gravedad y a la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos. Prohibición que ha llegado a ser considerada, incluso, como una norma de *jus cogens*, de derecho absoluto que por su propia naturaleza está exento de cualquier negociación⁵⁰.
85. Desde esta perspectiva, no procede imponer condiciones de oportunidad para formular la denuncia de tortura, porque como se ha precisado, constituye un acto que viola directamente el derecho humano a la dignidad humana, así como los derechos de libertad personal y a contar con una defensa adecuada por parte de la persona sujeta a un procedimiento penal, respecto del cual se aduce que se sustenta en pruebas ilícitas por tener su origen en actos de tortura.
86. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la denuncia, en las vertientes de delito y de violación a derechos humanos cometida presuntamente contra una persona sometida a un procedimiento penal, no tiene condiciones de preclusión, por lo que no puede impedirse que se alegue en cualquiera de las etapas de los procedimientos judiciales.
87. De lo contrario, se permitiría que el órgano jurisdiccional desestimara la denuncia de haber sufrido tortura, por el solo hecho de que no se haya expresado dentro de un plazo o etapa procedimental, con lo cual se dejaría incólume la posible violación a la integridad personal de la víctima, en contravención a lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 1º de la Constitución Federal, que comprende la obligación de todas las autoridades del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a

⁵⁰ En esa línea argumentativa, se resalta que los derechos humanos al ser consubstanciales a la naturaleza humana no se extinguen y por tanto tendrán vigencia en tanto existan "seres humanos". Al respecto, Gros Espiell sostiene que "los Derechos Humanos no se extinguirán nunca, pues siempre existirán ontológicamente". Citado por Alejandro A. Gama Urbiza, *Imprescriptibilidad de la Acción Penal en los Delitos de Violación de la Libertad Sexual*.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

derechos humanos, entre los que se ubican los actos de tortura.⁵¹

88. Al respecto, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada el doce de septiembre de dos mil cinco, en el Caso *Gutiérrez Soler vs. Colombia*, determinó:

“54. La Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Esta actuación está normada, además, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como a garantizar que los casos de tortura sean examinados imparcialmente. En el presente caso, la Corte observa que Colombia no actuó con arreglo a esas previsiones, ya que a la fecha ninguna persona ha sido sancionada por las torturas infligidas al señor Wilson Gutiérrez Soler y que el propio Estado ha reconocido defectos en relación con las garantías judiciales de los procesos internos (supra párrs. 26, 28 y 48.10). Desde que entró en vigor en Colombia la referida Convención Interamericana contra la Tortura, el 18 de febrero de 1999, es exigible al Estado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado. Por ello, para el Tribunal esta conducta constituye incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura en lo que atañe a la obligación de prevenir y sancionar la tortura en el ámbito interno”.

89. Similar pronunciamiento emitió en la sentencia de treinta de octubre de dos mil ocho, al resolver el Caso *Bayarri vs. Argentina*, en el que señaló:

“92. A la luz de lo anterior, este Tribunal debe reiterar que aun

⁵¹ Obligación que también está contenida en el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 6.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados parte tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros trato o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.

cuando la aplicación de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no haya sido denunciada ante las autoridades competentes, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento. Es indispensable que el Estado actúe con diligencia para evitar las prácticas de tortura, tomando en cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos. A las autoridades judiciales corresponde el deber de garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura. El Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos de manera que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión”.

90. Lo cual fue reiterado en la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil diez, al resolver el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, que en la parte conducente dice:

“135. A la luz de lo anterior este Tribunal reitera que, en todo caso en que existan indicios de la ocurrencia de tortura, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento. Es indispensable que el Estado actúe con diligencia para evitar alegados actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, tomando en cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos. Asimismo, a las autoridades judiciales corresponde el deber de garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar alegados actos de tortura. El Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos de manera que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión”.

91. De particular importancia resulta destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la obligación Estatal de investigar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los

derechos reconocidos en la Convención.⁵²

92. De lo cual se desprende la referida obligación internacional de procesar y, si se determina su responsabilidad penal, sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos. Lo cual tiene como sustento la garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Obligación que implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.⁵³
93. Como consecuencia de esa obligación, los Estados deben prevenir, respetar, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de derechos humanos⁵⁴.
94. De igual manera, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, establece:

“Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un delito de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su

⁵² Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24; Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, párr. 182, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, párr. 166.

El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios

⁵³ Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, párrafo 166; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, párrafo 65; Caso De la Masacre de las Dos Erres, párrafo. 234, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), párrafo 140.

⁵⁴ Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, párrafo. 166; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 112, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), párr. 140.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.

Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales”.

95. Por otra parte, el artículo 9º de la Convención en comento prevé la determinación internacional respecto de la vigencia indemnizatoria a través del tiempo, en los siguientes términos:

“Artículo 9. Los Estados Parte se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que pudieran tener la víctima u otras personas de recibir compensación en virtud de legislación nacional existente”.

96. Del texto de las normas citadas se advierte una mayor protección al derecho humano a la integridad personal y a no ser torturado, que en el derecho interno; además de hallarse concebidas en términos imperativos cuyo cumplimiento se impone sin mayor esfuerzo, ya que el término “nada” utilizado en ambas convenciones internacionales, determinan la imposibilidad de resquicio alguno que pudiera evitar su aplicación desde la normativa nacional.
97. Con base en lo expuesto, se concluye que la denuncia de tortura contra una persona a la que se le instruye o instruyó un proceso penal no debe sujetarse a condiciones de preclusión. Por tanto, el alegato debe ser atendido con independencia del momento en que se haga valer y no puede condicionarse a la preparación de la violación.
98. Ello implica que la denuncia o existencia de indicios de ocurrencia de la práctica de la tortura, en el contexto genérico del delito o cometida contra una persona sujeta a cualquier tipo de procedimiento penal por atribuírsele que cometió un delito, actualiza la obligación de investigación de la autoridad que conozca en ese momento del caso. Lo cual involucra tanto a autoridades

administrativas —agentes de cuerpos de seguridad pública y Ministerio Público—, así como autoridades judiciales de primera o segunda instancia, que durante el trámite de un proceso penal tengan conocimiento de una denuncia o advierta la existencia de evidencia razonable o tenga razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura contra el inculpado; y, también a los órganos de control constitucional que, en el ámbito de sus competencias, al conocer de un juicio de amparo indirecto o directo tengan información sobre la comisión de un hecho de tortura.

99. En consecuencia, no es procedente fijar alguna condición de oportunidad procesal para denunciar la violación a derechos humanos derivados de la práctica de la tortura. Pues conforme al estándar definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando los actos de tortura no hayan sido denunciados ante las autoridades, cuando existan indicios o razón fundada de su concurrencia, y con mayor razón ante la denuncia, el Estado tiene la obligación de iniciar de oficio y de inmediato la investigación respectiva. Lo que implica que la tortura puede alegarse en cualquier momento.
100. La anterior determinación encuentra pleno sustento en la jurisprudencia configurada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual al resolver el *Caso J. vs. Perú*,⁵⁵ precisó lo siguiente:

“Respecto de ambas razones, la Corte aclara que de la Convención Interamericana contra la Tortura surgen dos supuestos que accionan el deber estatal de investigar: por un lado, cuando se presente denuncia, y, por el otro, cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado. En estas situaciones, la decisión de iniciar y adelantar una investigación no es una facultad discrecional del Estado, sino que constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. Además, como ya ha señalado este Tribunal, aún cuando los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes, en todo caso en que existan

⁵⁵ Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. párr. 346.

*indicios de su ocurrencia, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento”.*⁵⁶

101. Así como en el criterio establecido por esta Primera Sala, en la tesis aislada 1a. CCVII/2014 (10a.), en la que se estableció que:

*“[...] [E]l hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva. En el entendido de que los referidos exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. De ahí que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito”.*⁵⁷

C. Tortura como violación a derechos humanos que tiene impacto en el proceso penal instruido contra una persona señalada como víctima de la misma

102. Ahora bien, como se ha señalado en la presente ejecutoria, esta Primera Sala ha establecido que por la trascendencia de afectación al derecho humano a la integridad personal, con motivo de la comisión de actos de tortura, se requiere que dicha conducta sea investigada desde dos vertientes, como delito en estricto sentido y como violación a los derechos humanos de la persona sometida a algún procedimiento penal, a partir de pruebas que

⁵⁶ El Tribunal Internacional cita como referencias la reiteración de la doctrina realizada en las resoluciones siguientes: *Caso Vélez Loor Vs. Panamá*, *supra*, párr. 240, y *Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala*, *supra*, párr. 278; *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*, *supra*, párr. 347, y *Caso Vélez Loor Vs. Panamá*, *supra*, párr. 240; y, *Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia*, *supra*, párr. 54, y *Caso García Lucero y otras Vs. Chile*, *supra*, párr. 124.

⁵⁷ Véase el contenido publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, p. 561; con el rubro: **“TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA”**. Precedente: Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. *Ibidem*.

presuntamente se obtuvieron con motivo de actos de tortura a los que fue sometido el inculpado.

103. Lo anterior es así, porque conforme al marco constitucional y convencional la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del *jus cogens* internacional. De ahí que las consecuencias y efectos de la tortura impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito⁵⁸.

C.1. Obligación de investigación

104. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CCVI/2014, estableció que frente a la denuncia o alegada tortura, ante cualquier autoridad, surgen diversos deberes que es imperativo cumplir por aquéllas en el ámbito de su competencia. Lo cual se determinó conforme a los enunciados siguientes:

- I. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión.
- II. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso.
- III. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de

⁵⁸ Criterio que fue fijado por esta Primera Sala en la tesis aislada CCV/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 56, con el rubro siguiente: **"TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES"**.

tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones.

IV. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma.

105. Directrices que retoman los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que de la Convención Interamericana contra la Tortura deriva el deber del Estado de investigar, cuando se presente denuncia o cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción. Obligación que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. Ello, al margen de que la tortura no se haya denunciado ante las autoridades competentes⁵⁹. Debiéndose entender por razón fundada la existencia de indicios de la ocurrencia de actos de tortura⁶⁰.

⁵⁹ El Tribunal Internacional cita como referencias la reiteración de la doctrina realizada en las resoluciones siguientes: *Caso Vélez Loor Vs. Panamá*, op. cit., párrafo 240; *Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala*, op. cit., párrafo 278; *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*, op. cit., párrafo 347; *Caso Vélez Loor Vs. Panamá*, op. cit., párrafo 240; *Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia*, op. cit., párrafo 54; y *Caso García Lucero y otras Vs. Chile*, op. cit., párrafo 124.

⁶⁰ La construcción de la conceptualización de razón fundada está basada en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, véase el *Caso García Lucero y otras Vs. Chile (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)*, sentencia de 28 de agosto de 2013, Serie C, No. 267, párrafos 122 y 124, que dicen: "122. Conforme a esos deberes, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben "iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva" por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Además, en relación con actos de tortura, el artículo 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura establece que las "autoridades proced[an] de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso", cuando "exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de [la] jurisdicción [estatal]".

[...]

124. La Corte advierte que es una obligación del Estado no sólo iniciar una investigación de oficio, sino de hacerlo también, como expresamente indica el artículo 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en forma "inmediata" a partir de que exista "razón fundada" para creer que se ha cometido un acto de tortura. Al respecto, la Corte ha dicho que: "aun cuando los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes por la propia víctima, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento".

106. En consecuencia, como lo ha reconocido esta Primera Sala, cuando alguna autoridad del Estado tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Investigación que tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables⁶¹.
107. Esto es así, porque corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados. De ahí que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión⁶².

C.2. Omisión de la investigación, como violación a las leyes del procedimiento que tiene trascendencia en la defensa del quejoso

108. Como ha quedado precisado, el derecho a la integridad personal (*física, psíquica y moral*), comprende el derecho fundamental a no ser torturado, ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Derechos que se traducen en una prohibición absoluta y de carácter inderogable a cargo del Estado.

⁶¹ Dicho criterio quedó plasmado en la tesis aislada CCVII/2014 de esta Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 561, con el rubro: "**TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA**".

⁶² Criterio establecido por esta Primera Sala en la tesis aislada LVII/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1425, con el rubro: "**TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA DE REALIZAR SU INVESTIGACIÓN**".

109. Por tanto, para los efectos de la reparación de una posible violación a ese derecho fundamental, es necesario determinar si la omisión de las autoridades judiciales de investigar una denuncia de tortura realizada en el proceso, constituye o no una violación procesal.
110. La respuesta a esta interrogante ha sido analizada por esta Primera Sala al resolver la Contradicción de Tesis 315/2014⁶³. En dicha ejecutoria se estableció que el derecho a un debido proceso, contiene un núcleo duro que debe observarse de manera inexcusable en todo el procedimiento jurisdiccional, y que se garantiza a través del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia". Lo cual, permite que los gobernados ejerzan el derecho a contar con una defensa adecuada previo a que mediante un acto de autoridad se modifique su esfera jurídica en forma definitiva, que puede implicar la privación de la libertad, propiedad, posesiones o derechos.
111. Lo anterior, conforme a la parte correspondiente de la tesis jurisprudencial 11/2014, sustentada por esta Primera Sala, con el rubro: **"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO"**⁶⁴.

⁶³ La contradicción de tesis fue presentada bajo la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y se resolvió en sesión de 30 de septiembre de 2015, en la que se aprobó por unanimidad de votos.

⁶⁴ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 396, con el contenido siguiente: "Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: **"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."**, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de

112. Por tanto, se precisó en la ejecutoria que las formalidades esenciales del procedimiento constituyen el mínimo de garantías que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado. De ahí que el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento es una obligación impuesta a las autoridades que se traducen en: **1)** la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; **2)** la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; **3)** la oportunidad de alegar; y **4)** el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y la existencia de un medio de impugnación.
113. De ahí que cuando se violan las formalidades esenciales del procedimiento, ello se traduce en un impedimento para el gobernado en el ejercicio pleno de su derecho fundamental de defensa previo al correspondiente acto privativo, que lo ubicó en un estado de indefensión. Lo cual fue precisado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis jurisprudencial 47/95, con el rubro: **“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”**⁶⁵.
114. En la misma ejecutoria, esta Primera Sala precisó que la reparación ante una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en materia penal

las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza”.

⁶⁵ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, con el texto siguiente: “La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado”.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

procedía reclamarla en el juicio de amparo directo. Ello, en términos del contenido de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo⁶⁶, que en su esencia coincide con lo que dispone el párrafo primero del artículo 158 de la abrogada⁶⁷.

115. En tanto que en el artículo 173 del ordenamiento legal de referencia (que se corresponde con el artículo 160 de la Ley de Amparo abrogada⁶⁸), se

⁶⁶ **Ley de Amparo vigente:**

Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

[...]

⁶⁷ **Ley de Amparo abrogada:**

Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

[...]

⁶⁸ **Ley de Amparo abrogada:**

Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:

I. Cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre de su acusador particular si lo hubiere;

II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscripto (sic) al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio;

III. Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él;

IV. Cuando el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;

V. Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se la (sic) coarten en ella los derechos que la ley le otorga;

VI. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho;

VII. Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;

VIII. Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa;

IX. Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20, fracción VI, de la Constitución Federal, en que deba ser oído en defensa, para que se le juzgue;

X. Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del Agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria; sin la del juez que deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto;

XI. Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por otro tribunal;

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

establece un catálogo que informa diversos supuestos en los que, en los juicios del orden penal, se consideran violadas las leyes del procedimiento por trascender en la defensa de los quejosos.

Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:

- I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley;
- II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta al juez que deba intervenir;
- III. Intervenga en el juicio un juez que haya conocido del caso previamente;
- IV. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la ley;
- V. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral;
- VI. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones;
- VII. El juzgador reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra;
- VIII. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;
- IX. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención, en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el juez, de los hechos que se

XII. Por no integrarse el jurado con el número de personas que determine la ley, o por negársele el ejercicio de los derechos que la misma le concede para la integración de aquél;

XIII. Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de distinta índole de la que señale la ley;

XIV. Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquiera otra coacción;

XV. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente;

XVI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito.

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal;

XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

le imputan y los derechos que le asisten;

X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;

XI. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarle;

XIII. No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso;

XIV. En caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español o sea sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se les proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;

XV. No se cite al imputado para las diligencias que tenga derecho a presenciar o se haga en forma contraria a la ley, siempre que por ello no comparezca, no se le admita en el acto de la diligencia o se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga;

XVI. Debiendo ser juzgado por un jurado, no se integre en los términos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal;

XVII. Se sometan a la decisión del jurado cuestiones de índole distinta a las señaladas por la ley;

XVIII. No se permita interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión;

XIX. Al dictarse una sentencia definitiva absolutoria o un auto que se refiera a la libertad del imputado no se hayan respetado, entre otros, los siguientes derechos de la víctima u ofendido del delito:

a) A que se le proporcione asesoría jurídica y se le informe tanto de los

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

derechos que le asisten como del desarrollo del procedimiento penal;

b) A coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en investigación como en el proceso y a que se le permita intervenir en el juicio;

c) Al resguardo de su identidad cuando sean menores de edad o por delitos de violación, secuestro, delincuencia organizada o trata de personas y cuando a juicio del juzgador sea necesaria su protección, salvo que tal circunstancia derive de la debida salvaguarda de los derechos de la defensa; y

d) A solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos;

XX. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad haya sido establecido (sic) expresamente por una norma general;

XXI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de vinculación a proceso, el quejoso hubiese sido sentenciado por diverso delito.

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de vinculación a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio;

XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.

116. Respecto al último supuesto normativo, esta Primera Sala destacó que evidencia la formulación de un catálogo no limitativo o taxativo, sino uno meramente enunciativo⁶⁹.

⁶⁹ Con relación a esa afirmación, en la tesis jurisprudencial 22/2000 de esta Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 114, de rubro: "**AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACIÓN. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO)**", se señaló: "[A] partir de la reforma a ese numeral, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha treinta de abril de mil novecientos sesenta y ocho, dichos casos quedaron establecidos de manera enunciativa -y por ende, no limitativa-, pues es claro que al ser incluida la última fracción XVII, se permitió la introducción de aquellos supuestos que advirtiese la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, mediante un ejercicio discrecional análogo a las hipótesis anteriores; facultad que no existía con anterioridad a la citada modificación. En el anterior contexto, deviene inconcuso colegir, que con la adición comentada, el legislador abandonó el rigor de la aplicación literal del artículo 160 de la Ley de Amparo, optando por una verdadera interpretación analógica acorde a todos

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

117. Sobre la base expuesta, se precisó en la referida **contradicción de tesis 315/2014**, que de la interpretación armónica de los artículos 170, fracción I, y 173 de la Ley de Amparo, se obtenía:

- I. La regla general para la procedencia del juicio de amparo directo, que es conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, para reclamar sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; y respecto de los cuales se hayan agotado previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales pudieran ser modificadas o revocadas, salvo el caso de que la ley permita la renuncia de los recursos.
- II. La delimitación de la materia de la citada vía constitucional, configurada por el estudio de las violaciones cometidas en las propias resoluciones reclamadas en el juicio de amparo directo, o bien, de las cometidas en los procedimientos respectivos, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

118. En ese orden de ideas, si la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos, o bien, degradantes, tutela el derecho fundamental a la integridad personal (física, psíquica y/o moral); y se acredita la afectación de ese derecho con relación a un proceso penal, claramente se actualiza la violación a las leyes del procedimiento que se establece en la fracción VIII, del artículo 173 de la Ley de Amparo.

y cada uno de los supuestos contenidos en sus diversas fracciones; y ello, con afán de materializar el espíritu eminentemente protector de las garantías establecidas en favor de los gobernados y concretamente, de aquellas personas que se encuentran sujetas a los procedimientos penales, cuya indefensión puede ser producida en múltiples y variadas formas, en torno a las cuales, en forma alguna el legislador está capacitado para enunciar taxativamente”.

119. Sin embargo, es importante precisar que al actualizarse la violación referida, a partir del supuesto de tener por demostrada la tortura, ello hace innecesario la reposición del procedimiento penal, al quedar excluida al presunción de la comisión de dicha violación que activa la obligación de investigación, en virtud de la comprobación de la vulneración al derecho humano de la integridad personal por actos de tortura. Por tanto, en el supuesto referido, la autoridad judicial está en condiciones de realizar un escrutinio estricto de valoración probatoria para determinar la aplicación de las reglas de exclusión de aquéllas que tengan el carácter de ilícitas por la relación que tienen con los actos de tortura. Lo cual se precisa con mayor amplitud en el apartado subsecuente.

120. Pero un supuesto diferente se presenta cuando la autoridad judicial omite investigar una denuncia de tortura realizada en el correspondiente proceso penal; pues en este caso, no está demostrada la existencia de la violación al derecho fundamental a la integridad personal, y por tanto, no rige directamente la hipótesis aludida.

121. No obstante, de acuerdo con el párrafo tercero, del artículo 1° de la Constitución General, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Supuesto que es aplicable a la violación a derechos humanos por actos de tortura, como lo establecen los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura⁷⁰.

⁷⁰ **Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:**

Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.

Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades

122. Por tanto, si los gobernados, constitucional y convencionalmente, tienen el derecho fundamental a que el Estado investigue las violaciones a los derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de tortura, y si la tortura afecta el derecho fundamental a un debido proceso legal, entonces, ante una denuncia de ese tipo, la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye, en consecuencia, una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los gobernados, previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos.
123. Esto es así, porque al ser la tortura una violación a derechos humanos de la que es posible que se puedan obtener datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la persona identificada como presunta víctima de la tortura, resulta evidente que existe una clara relación entre la violación a derechos humanos con el debido proceso. Lo cual implica que, luego de realizarse la investigación que es necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, entonces la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas.
124. Por tanto, soslayar una denuncia de tortura, sin que se realice la investigación correspondiente, ubica necesariamente en estado de indefensión a quien la alega, ya que al no verificar su dicho, se deja de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictara sentencia.

procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.

Artículo 10. Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

125. A partir de las razones jurídicas expuestas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura realizada en el proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a la defensa del quejoso, en términos de la fracción XXII, del artículo 173 de la Ley de Amparo, con relación al párrafo tercero, del artículo 1° de la Constitución General y 1°, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
126. Afirmación que no aplica con la denuncia de tortura en su vertiente de delito; pues ante la omisión del juez de primera instancia, la autoridad que conozca del asunto, sea de alzada o de amparo, al enterarse del correspondiente alegato soslayado, o percatarse oficiosamente de la posible existencia de tortura, asume inmediatamente la obligación de hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Por tanto, no sólo carece de razón legal que justifique la reposición del procedimiento para ese único fin, sino además, se incidiría sobre una expedita impartición de justicia.
127. A partir del estudio precedente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación delimita la identificación del supuesto en que se actualiza la violación a las formalidades esenciales del procedimiento que trasciende a la defensa del quejoso, conforme a lo dispuesto en el artículo 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación al 1°, párrafo tercero, de la Constitución General, así como 1°, 6, ° y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
128. La premisa que debe tenerse en cuenta parte de la base de que una autoridad judicial durante el trámite de un proceso penal tiene conocimiento de la denuncia o alegato de tortura, o bien advierte la existencia de indicios o datos de su ocurrencia; sin embargo, omite investigar dicha violación al derecho humano de dignidad de las personas por actos de tortura.
129. El cumplimiento a los parámetros imperativos impuestos desde el marco

jurídico internacional o nacional, ante la denuncia o la advertencia de indicios coincidentes con la comisión de tortura, obligan a la autoridad judicial que conoce del proceso penal, luego de dar vista al Ministerio Público para que se investigue el hecho bajo la vertiente de delito, a realizar un análisis oficioso de los elementos materiales con los que se cuentan hasta la etapa procesal en que se actúa, con el objetivo de determinar si cuenta o no con elementos que le permitan concluir que existió la tortura.

130. En el caso de que esté en posibilidad de afirmarse existencia de la tortura, ello hace innecesario aperturar una investigación adicional en el propio proceso penal, por lo que al decidir la situación jurídica del procesado tendrá que analizar si dicha violación a derechos humanos tuvo un impacto en la generación, introducción o desahogo de pruebas incorporadas a la causa penal, porque de ser así tendrá que aplicar las directrices de exclusión de probatoria de la prueba ilícita.

131. De lo contrario, ante la insuficiencia de indicios que le permitan a la autoridad judicial determinar si aconteció o no la comisión de actos de tortura contra el procesado, entonces deberá realizarse la investigación en el propio proceso penal de manera que permita obtener una respuesta a esa interrogante. Es en este punto de análisis en que se ubica la violación a las formalidades esenciales del procedimiento que dejan sin defensa al procesado, cuando se omite realizar la investigación referida. De ahí que al detectarse la falta de investigación después de concluir la etapa de instrucción del proceso penal, ello necesariamente obliga a reponer el procedimiento para que sea subsanada la omisión y la situación jurídica del procesado pueda resolverse a partir de tener en cuenta dicha circunstancia. Lo cual lleva al planteamiento que a continuación se desarrolla relativo a la determinación del momento procesal hasta donde debe reponerse el procedimiento.

C.3. Reposición del proceso penal con motivo de la omisión de investigación de la denuncia de tortura, que implica violación a las formalidades esenciales del procedimiento que deja sin

defensa a una persona sujeta a un procedimiento penal

132. Una vez establecido el deber de investigación de la tortura, por parte de las autoridades del Estado, cuando proviene de una denuncia o la existencia de indicios concordantes para suponer bajo un parámetro de probabilidad razonable de que la violación a derechos humanos aconteció, en relación con una persona que está sometida a un procedimiento penal por la imputación formulada en su contra de haber cometido o participado en la comisión de un delito, es evidente que la omisión de realizar la investigación respectiva constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que dejó sin defensa a quien tiene el carácter de probable víctima de tortura.
133. Lo anterior es así, porque precisamente es la investigación la que en su caso permitiría determinar, en un primer momento, corroborar si la violación a derechos humanos por actos de tortura efectivamente aconteció; en segundo lugar, porque de afirmarse la existencia de la violación a la integridad personal del inculcado, derivado de la tortura infligida, entonces correspondería determinar si dicha conducta violatoria de derechos humanos tuvo alguna incidencia en la etapa procedimental en que esto se demuestre; de manera que la situación jurídica del inculcado esté determinada a partir del valor demostrativo que la autoridad haya otorgado a elementos de prueba que tuvieran como origen los actos de tortura, respecto de los cuales deberían ser aplicables las reglas de exclusión probatoria.
134. Tal como se precisó en el anterior apartado, la actualización de la violación al debido proceso, derivada de la omisión de investigar la existencia de tortura, con motivo de una denuncia o la existencia de indicios concordantes para suponer bajo un parámetro de probabilidad razonable de que la violación a derechos humanos aconteció, da lugar a que la vía de reparación óptima no sea otra que ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se lleve a cabo la investigación respectiva. Ello, porque únicamente será posible determinar el impacto de la tortura en el proceso penal, una vez que ésta se haya acreditado, como resultado de una investigación exhaustiva y

diligente.

135. Sin embargo, es oportuno aclarar que la citada reposición del procedimiento no tiene aplicación hasta la etapa procedimental de averiguación previa. Ello, porque si bien las violaciones que se actualicen en dicha etapa procedimental no son susceptibles de estimarse como de imposible reparación, sino que pueden ser objeto de análisis en las subsecuentes etapas del proceso penal que ya se tramita ante una autoridad judicial y mediante juicio de amparo; lo cierto es que la vía de reparación de la violación a derechos humanos no tiene el alcance de anular, per se, la investigación ni las pruebas ya desahogadas en juicio, por la razones que se expondrán en lo párrafos subsecuentes.
136. De ahí que con independencia del momento en que se actualice el conocimiento de alguna de las autoridades del Estado, sobre la denuncia de actos de tortura o la existencia de indicios concordantes que potencializan la probabilidad de que dicha violación a derechos humanos haya acontecido. Lo cual pudiera darse en cualquiera de las etapas procedimentales: averiguación previa, preinstrucción, instrucción, primera instancia y segunda instancia. Es necesario que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determine hasta qué etapa y momento procesal debe reponerse el procedimiento, así como los efectos que trae aparejados dicha determinación.
137. Así, en atención al objeto que guía al deber de investigar una denuncia de tortura, así como los efectos que se generan de llegarse a acreditar, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la indicada reposición del procedimiento deberá realizarse hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema procesal tradicional⁷¹.

⁷¹ Denominación asignada al sistema procesal penal prevaleciente previo a la aplicación de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que introdujo el sistema procesal penal acusatorio y oral.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

138. Lo anterior, con el objeto de salvaguardar el punto en tensión que se genera respecto del derecho fundamental a una expedita impartición de justicia, que se consagra en el artículo 17 de la Constitución General, así como el derecho fundamental de los inculpados a no ser objeto de tortura, y los correspondientes derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos de los delitos; pues no puede soslayarse que el objeto de la reposición del procedimiento, únicamente se relaciona con la práctica de las diligencias necesarias para verificar la veracidad de la denuncia de actos de tortura, a través de una investigación diligente, que implica exclusivamente la práctica de los exámenes periciales correspondientes que determinen la existencia o no de los actos de tortura.
139. Esto es, la reposición del procedimiento tiene como justificación que se investigue la tortura alegada, a efecto de verificar su existencia; no porque exista alguna otra violación concreta y constatada al derecho de defensa del sentenciado.
140. Por tanto, ninguna razón existe para que se afecte todo lo desahogado en el proceso; pues en caso de que la denuncia de tortura no se compruebe, las correspondientes actuaciones y diligencias subsistirán íntegramente en sus términos; y para el caso de que se justifique la existencia de la violación denunciada, los efectos de su acreditación únicamente trascenderán con relación al correspondiente material probatorio, que en su caso será objeto de exclusión al momento de dictar la sentencia.
141. Acorde a lo expuesto, no debe anularse todo lo actuado en el juicio, pues ello conllevaría la invalidez de todas las actuaciones y diligencias realizadas; y luego la necesidad de su posterior desahogo, con independencia del resultado que arroje la correspondiente investigación sobre la denuncia de tortura. Ello, con la consecuente afectación a la pronta impartición de justicia, el riesgo latente de no poder reproducir las pruebas, e incluso, el efecto revictimizador de las personas que resintieron la comisión del delito.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

142. Ahora bien, es importante señalar que al resolver el **amparo directo en revisión 6564/2015**⁷², esta Primera Sala llegó a la convicción de que en determinados casos concretos, no existe necesidad de ordenar la reposición del procedimiento, ante la noticia de tortura, para realizar una investigación dentro del proceso penal en el que el inculpado manifestó haber sido víctima de esa violación a derechos humanos, a fin de que se determine si existió tal violación, así como el posible impacto en el proceso seguido en su contra, pues ello podrá actualizarse únicamente si como consecuencia de la tortura denunciada existieran declaraciones, confesiones o alguna otra clase de información autoincriminatoria, porque sólo de esa forma tendrá trascendencia en el proceso, en tanto que no la habrá si el inculpado a pesar de aducir que fue objeto de dicha violación no reconoce los hechos imputados o se abstiene de declarar, dado que no existirá repercusión en su contra.
143. Así las cosas, si por otro lado existen pruebas que acrediten fehacientemente la intervención del inculpado en los hechos atribuidos en el proceso penal de que es objeto, aun ante la abstención de declarar o, en su caso, ante la negativa de haberlos cometido y, el tema sobre la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso, resulta que la denuncia planteada no tiene impacto en el proceso penal respectivo.
144. Efectivamente, según se dijo en el señalado precedente, si se parte de la base que se analiza respecto del derecho fundamental a no ser objeto de tortura, desde su perspectiva de violación a derechos humanos con trascendencia al proceso penal, entonces, fundadamente se puede concluir que la existencia de una confesión o alguna otra declaración o información autoincriminatoria que se alega fue obtenida con base en la tortura, en caso de que la denuncia correspondiente resulte verosímil y justificada, esa

⁷² Resuelto en sesión de 18 de mayo de 2016, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Ielo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente); en contra de los emitidos por los Ministros Norma Lucía Piña Hernández y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular voto particular.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

circunstancia debe llevar necesariamente a la exclusión de la prueba.

145. Por otro lado, para el caso de que se denuncie la tortura, pero no se corrobore la existencia de la confesión de los hechos, ni de ninguna otra declaración o información autoincriminatoria, resultará que no habrá prueba sobre la que pudiera impactar la correspondiente violación de derechos humanos, aún en el extremo de que llegara a justificarse. Lo anterior, en el entendido de que pudieren existir específicos supuestos en los que se acredite que existen declaraciones, datos o información que si bien no entran en el contexto de la confesión, sí pueden encontrarse vinculados con el proceso penal y deben ser considerados pruebas ilícitas.
146. Así, se estableció que a ningún sentido práctico conduciría el hecho de que, con motivo de la correspondiente denuncia de tortura, se ordenara la reposición del procedimiento a efecto de realizar la investigación, pues finalmente, aunque se justificara perfectamente la violación de derechos humanos, no habría consecuencias procesales al no haber confesión, declaración o información que excluir. Inclusive, reponer el procedimiento únicamente generaría un perjuicio al derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia, que se consagra como punto cardinal de todo el sistema judicial, en el artículo 17 de la Constitución Federal.
147. En conclusión, se estableció que en aquellos casos en los que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la tesis jurisprudencial 10/2016 de esta Primera Sala, citada en párrafos precedentes; pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto.
148. Sin embargo, fuera de esos casos de excepción deberá procederse como se describe en el criterio jurisprudencial de referencia. Es decir, la jurisprudencia

a que se alude tendrá aplicación siempre que se trate de asuntos en los que como consecuencia de la tortura se haya verificado la confesión o cualquier manifestación inculpativa del inculpaado porque, en tal caso, la autoridad jurisdiccional estará obligada a realizar una investigación a fin de determinar si se actualizó o no la tortura y, de obtenerse un resultado positivo, deberá ceñirse a los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, esto es, que de no acreditarse el señalado supuesto de excepción, el citado criterio operará en sus términos.

D. Aplicación de las reglas de exclusión probatoria ante la demostración de tortura como violación a derechos humanos que tiene impacto en un proceso penal instruido contra una persona señalada como víctima de la misma

149. Bajo ese contexto, consciente de la gravedad que implica la práctica de la tortura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de agosto de dos mil nueve, al resolver el amparo directo 9/2008⁷³, determinó que el derecho a no ser objeto de la misma es absoluto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, precisó que el Estado Mexicano tiene diversas obligaciones a fin de prevenirla y sancionarla, distinguiéndose entre aquéllas tendentes a contemplarla y castigarla como delito⁷⁴, de las que están encaminadas a identificarla como violación a la integridad personal, con

⁷³ Mayoría de cuatro votos. Disidente: Ministro Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

⁷⁴ Verbigracia, tipificarla dentro de su ordenamiento jurídico interno como conducta punible, detener oportunamente al torturador para procesarlo internamente o extraditarlo, sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella, imponer penas adecuadas a la gravedad del ilícito e indemnizar a las víctimas.

repercusión al derecho humano de debido proceso⁷⁵.

150. En dicho precedente se señaló que para estar en condiciones de cumplir de manera adecuada esas obligaciones, todos los agentes estatales tienen el deber de suministrar la evidencia que posean respecto a la misma⁷⁶ y claramente se dijo, en torno al delito de tortura, que éste no podía presumirse, sino era necesario que se probase.⁷⁷Lo anterior torna indispensable dilucidar dos situaciones: **1)** ante la alegada tortura, a quién corresponde la carga de la prueba; y **2)** cuál es el estándar probatorio requerido para tenerla por demostrada.

151. Respecto a la primera de esas interrogantes, este Alto Tribunal ha establecido que es labor de las autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, investigar la tortura⁷⁸, por lo que en ningún caso la persona que dice haberla sufrido tiene la carga de probarla, sin que ello obste su derecho para aportar las evidencias que estime pertinentes. Ahora bien, en cuanto al segundo de esos cuestionamientos, relativo al indicado estándar probatorio, sería desacertado pretender la existencia de un único baremo que abarcara la demostración de la tortura como delito y la demostración de ésta como violación a la integridad persona, con repercusión al derecho humano de

⁷⁵ Por ejemplo, se indicó que estaba prohibido que toda declaración o confesión que haya sido obtenida bajo tortura pudiera ser considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el propio torturador.

⁷⁶ Véase, tesis 1a. CXCII/2009, de esta Primera Sala, de rubro: **“TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA”**. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materias: constitucional, penal, noviembre de 2009, página 416.

Precedente: Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

⁷⁷ Lo que dio lugar a la tesis 1a. CXCI/2009, intitulada:

“TORTURA. LA ACTUALIZACIÓN DE ESE DELITO NO PUEDE PRESUMIRSE, SINO QUE DEBE PROBARSE Y SUJETARSE A TODAS LAS REGLAS DE UN DEBIDO PROCESO PENAL”.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia: Penal, noviembre de 2009, página 416.

Precedente: Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

⁷⁸ Al tema se invoca la tesis aislada LIV/2015 de esta Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1424, de rubro: **“TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE”**.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

debido proceso, pues los elementos que condicionen la actualización de esas hipótesis son distintos.

152. En efecto, partiendo de la base de que el delito constituye una conducta típica, antijurídica y culpable, el Ministerio Público, además de acreditar que la víctima fue objeto de la indicada violación a su integridad personal, estará compelido a comprobar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del autor en su comisión, lo que finalmente se deberá decidir por la autoridad judicial en el proceso penal respectivo, instruido con motivo de la perpetración del referido ilícito de tortura. En el segundo supuesto, es decir, cuando se analiza la tortura como violación a la integridad persona, con repercusión al derecho humano de debido proceso, para tenerla por acreditada bastará que se demuestre la existencia de la mencionada afectación a la integridad personal, aunque de momento no sea posible identificar al o a los torturadores.
153. Sobre esto último, se reitera que este Máximo Tribunal ha determinado que cuando alguna autoridad tiene conocimiento de que quizá una persona ha sufrido tortura, debe —inmediatamente y de oficio— dar vista al ministerio público para que se inicie una investigación penal tendente a esclarecerla como delito, la cual necesariamente habrá de ser independiente, imparcial y meticulosa; si esa noticia surge dentro de algún proceso penal seguido contra quien alega haber sido víctima de tortura, el juez de la causa debe verificar la veracidad de la misma para determinar su impacto procesal, requiriéndose en ese caso, para tener por demostrada la tortura como violación a la integridad persona, con repercusión al derecho humano de debido proceso, un estándar más bajo que el exigido para la configuración del delito de tortura, pues bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores.
154. Ello es acorde a un paradigma pro derechos humanos, pues a través de dicho estándar bajo se logra desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción en perjuicio de los justiciables, de tal suerte que como se apuntó en

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

los apartados precedentes, competirá a los agentes estatales encargados de la acusación demostrar que las declaraciones de los imputados fueron libres y espontáneas.

155. A fin de efectuar dicha verificación con base en el mencionado estándar, la autoridad judicial competente deberá ordenar de inmediato la realización de los exámenes pertinentes para el adecuado esclarecimiento de lo sucedido, dependiendo del tipo de maltrato alegado⁷⁹, aplicándose para ello lo previsto en el protocolo de Estambul⁸⁰, en la inteligencia que de no hacerlo, se vulnerarán las reglas esenciales del procedimiento, en detrimento del justiciable.
156. Ahora bien, corresponde determinar cómo aplica la regla de exclusión probatoria ante la demostración de tortura, debido a que el proceso de generación, ofrecimiento y admisión de pruebas en ningún caso puede resultar contrario al goce y ejercicio de los derechos humanos, se deben excluir las obtenidas a raíz o como consecuencia de la violación de éstos.
157. En este sentido, esta Primera Sala ha sido firme en sostener que si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida⁸¹. Por ello, ninguna prueba que vaya

⁷⁹ Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis aislada LVI/2015 de esta Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1423, de rubro y texto: **"TORTURA. GRADOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LAS PERSONAS.** Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado; abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona, como son: la duración de los tratos, la edad, el sexo, la salud, el contexto y la vulnerabilidad, entre otros, que deberán analizarse en cada situación concreta".

⁸⁰ Manual adoptado por la Organización de Naciones Unidas para la investigación y documentación integral de casos de tortura y otros tratos o penas crueles.

⁸¹ Al tema resulta aplicable la tesis jurisprudencial 139/2011 de esta Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, página 2057, que establece: **"PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.** Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculcado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al

contra el derecho debe ser admitida y si pese a ello ya se desahogó, debe restársele todo valor probatorio.

158. Sobre la base de la anterior premisa, tratándose de la tortura, si se ha determinado su existencia, ya sea como delito o como violación al derecho humano de debido proceso, se debe excluir todo medio de convicción que haya sido obtenido directamente de la misma o que derive de ésta, lo cual comprende declaraciones, confesiones y toda clase de información inculpativa resultado de éstas. Al respecto, esta Suprema Corte considera que se debe atender la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*, cuando se determinó:

*“167. Por otra parte, este Tribunal considera que las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el Tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona o a un tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio justo. Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. En consecuencia, la Corte considera que excluir la prueba que haya sido encontrada o derivada de la información obtenida mediante coacción, garantiza de manera adecuada la regla de exclusión”.*⁸²

establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables”.

⁸² El Tribunal Internacional, en este rubro, hizo referencia a las resoluciones siguientes:

Cfr. ECHR, Case of John Murray v. UK, Judgment of 25 January 1996, App. N°. 41/1994/488/570, paras. 45-46 y *Case of Jalloh v. Germany*, Judgment of 11 July 2006, App. N°. 54810/00, paras. 121-123. *Cfr.* De manera similar, el Tribunal Europeo ha señalado que "el uso de declaraciones obtenidas como resultado de torturas o malos tratos como evidencia para establecer los hechos en un proceso

E. Aplicación al caso concreto de la doctrina constitucional en materia de tortura.

159. Como fue sintetizado, en el caso, el tribunal de amparo dedicó un apartado específico (el último apartado de su sentencia) a explicar las razones y los fundamentos por los cuales no podía soslayar los alegatos de tortura hechos valer por la quejosa. Incluso examinó el caso más allá de lo planteado en la demanda de amparo. Esto es, transcribió la primera declaración en la que la quejosa alegó haber sido objeto de tortura (una retractación de la declaración ministerial) y los careos en los que ella directamente imputó actos de tortura uno de los policías aprehensores.
160. Es posible advertir que el tribunal colegiado documentó exhaustivamente los alegatos hechos valer por la quejosa en el sentido de que se ejerció violencia sobre ella para firmar documentos que no conocía, y así aceptar su participación en los hechos. Siguiendo los criterios de esta Sala sobre la tortura como delito, el tribunal colegiado correctamente decidió ordenar dar vista al Ministerio Público para que iniciara una investigación sobre el tema.
161. No obstante, en otro apartado de su sentencia, el propio tribunal colegiado justificó por qué consideró acertado dar valor a la declaración ministerial donde la quejosa realizó lo que él mismo describió como una confesión calificada divisible. Al respecto, señaló literalmente lo siguiente:

“Así las cosas, fue correcto que la responsable otorgara valor probatorio a la primigenia declaración de la quejosa, pues constituye una confesión calificada divisible con valor indiciario, ya que admite hechos propios constitutivos del delito; y, si bien, con posterioridad a la emisión de su declaración ante el Ministerio Público se retracta en parte de su primigenio testimonio, al no encontrarse corroborada sus posteriores declaraciones con medio

penal hace que dicho proceso sea en su totalidad injusto y esta conclusión es independiente del valor probatorio asignado a tales declaraciones, o de si su utilización fue decisiva para la condena”. ECHR, *Case of Gafgen v. Germany*, Judgment of 1 June 2010, App. N°. 22978/05, para. 165 y *Case Harutyunyan v Armenia*, Judgment of 28 June 2007, App. N°. 36549/03, para. 63. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

de prueba eficiente, es por lo que se considera que constituyen argumentos defensas sin valor probatorio, de esa forma, su primer ateste adquiere preponderancia sobre las segundas, por haber sido emitida recién verificado el evento delincencial sin tener la oportunidad de reflexionar acerca de lo sucedido con el fin de alterar los hechos con el fin de mejorar su situación jurídica; luego, su declaración ministerial era de tomarse en cuenta –en los términos que lo hizo la autoridad responsable–, en cuanto a lo que le perjudica y no en lo que le pudiera beneficiar ya que ello está desvirtuado en autos[...]⁸³.

162. El proceder del tribunal colegiado en este punto no se ajusta con los estándares antes explicados: soslayó por completo analizar la tortura como violación de derechos humanos de debido proceso. Soslayó analizar si la declaración en la que la quejosa aceptó haber tenido un rol en la escena del crimen podía estar viciada con motivo de los actos de tortura que él mismo consideró dignos de atención del Ministerio Público.
163. Según señaló este Alto Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 6564/2015, la reposición del procedimiento para que el Juez de la causa investigue la tortura en su vertiente de violación a derechos humanos, procederá siempre que se advierta que los alegados actos de tortura hubieran podido tener un impacto en el procedimiento respectivo. Esto se traduce en la existencia de una confesión o cualquier otro dato o información autoincriminatoria.
164. En este sentido, del análisis de las constancias del expediente se desprende que en el caso concreto los alegados actos de tortura sí pudieron tener un impacto en el procedimiento, pues subsiste su declaración ministerial, técnicamente calificada por el tribunal colegiado (y por la propia autoridad responsable) como una confesión calificada divisible.⁸⁴
165. Así las cosas, se estima que el tribunal colegiado incorrectamente desestimó el alegato de tortura sin tomar en cuenta que, de acuerdo con la doctrina

⁸³ Sentencia de amparo, p. 352.

⁸⁴ Ver hoja 213 del cuaderno relativo a al toca penal 122/2014.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

antes expuesta, existe un estándar de prueba atenuado para acreditar la tortura entendida como violación a derechos fundamentales y que a la quejosa no le corresponde la carga de la prueba respecto de los hechos calificados como tortura.

166. El tribunal colegiado no debió limitarse simplemente a dar vista al Ministerio Público, sino que debió conceder el amparo para efecto de que la Sala responsable ordenara la reposición del procedimiento y, de este modo, el Juez de la causa llevara a cabo una investigación en los términos precisados en la presente sentencia.

167. No es la primera vez que esta Sala considera que una declaración autoincriminatoria, como la llamada confesión calificada divisible, amerita la aplicación del criterio desarrollado en el amparo directo en revisión 6564/2015. En el mismo sentido se resolvió el amparo directo en revisión 2870/2016⁸⁵.

168. Así, a la luz de los criterios ya citados, esta Primera Sala estima procedente revocar la sentencia recurrida, a efecto de verificar si existió o no la transgresión al derecho humano de la quejosa a no ser objeto de tortura para los fines probatorios correspondientes al dictar la sentencia.

169. Consecuentemente, procede revocar la sentencia recurrida en la materia de la revisión y devolver los autos al tribunal colegiado, a efecto de que ajuste su criterio a la doctrina constitucional desarrollada por esta Primera Sala.

IX. DECISIÓN

170. Al concluir que el tribunal colegiado se apartó de los criterios sostenidos por esta Primera Sala en el tema de tortura, lo procedente es devolverle los autos para que se ajuste a las consideraciones que han quedado definidas en esta

⁸⁵ Resuelto en sesión de 15 de marzo de 2017, por mayoría de tres votos, bajo la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. Disidentes: Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4122/2016

ejecutoria.

Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Devuélvase los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para los efectos precisados en la presente ejecutoria.

Notifíquese. Con testimonio de esta ejecutoria; devuélvase los autos relativos al lugar de origen; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.